

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA**

**NOTIFICACIÓN POR ESTADO No. 49**

**REFERENCIA:** PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR PRESUNTA  
INFRACCIONES A LA NORMATIVIDAD MARÍTIMA COLOMBIANA.  
INVESTIGACIÓN No. 15022022-020- MN "ZENITH".

**RESOLUCIÓN:** NÚMERO RESOLUCIÓN NÚMERO (0035-2022) MD-  
DIMAR-CP05-JURIDICA 16 DE FEBRERO DE 2022, POR LA CUAL SE  
ORDENA EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA  
NÚMERO 15022022-020.

---

EL PRESENTE AUTO SE FIJA HOY DIECISIETE (17) DE FEBRERO DEL AÑO  
DOS MIL VEINTIDÓS (2022) A LAS 08:00 HORAS, Y SE DESFIJA EL MISMO DIA  
A LAS 18:00 HORAS.



**KATHERIN CASTELLAR LASTRE**  
ASESORA JURÍDICA CP05

## **RESOLUCIÓN NÚMERO ( 0035-2022) MD-DIMAR-CP05-JURIDICA 16 DE FEBRERO DE 2022**

Por la cual procede este despacho a proferir auto de archivo dentro de la investigación administrativa No. 15022022- 020 adelantada con ocasión acta de protesta de fecha 14 de enero de 2022, diligenciado por el personal de inspectores adscritos a la Capitanía de Puerto de Cartagena, en contra de la motonave denominada “ZENITH”, con número de matrícula CP-05-3599-B por presunta infracción a normas de la marina mercante colombiana, en concordancia con el numeral 8° del artículo 3 del Decreto 5057 de 2009.

### **EL SUSCRITO CAPITÁN DE PUERTO DE CARTAGENA**

En uso de las facultades legales conferidas en el Decreto Ley 2324 de 1984 y en especial las conferidas en el Decreto 5057 de 2009.

### **ANTECEDENTES**

Mediante acta de protesta suscrita por el Cuerpo de inspectores adscritos a la Capitanía de Puerto de Cartagena de fecha 14 de enero de 2022, se informó a este despacho los hechos relacionados con la motonave denominada “ZENITH”, por la presunta infracción a la normatividad marítima colombiana, contenidas en el reglamento marítimo colombiano 7.

Mediante auto data 25 de enero de 2022, se procedió a iniciar averiguación preliminar en contra de la motonave denominada “ZENITH”.

En virtud de lo anterior, el despacho procede a pronunciarse de la siguiente manera:

### **CONSIDERACIONES DEL DESPACHO**

El artículo 2º del Decreto Ley 2324 de 1984, establece que la Dirección General Marítima ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y fluvio-marinos; mar territorial, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas suprayacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción; islas, islotes y cayos y, sobre los ríos que se relacionan en la presente normatividad, en las áreas indicadas.



Concordantemente, el numeral 8º del artículo 3º del Decreto 5057 de 2009, establece que corresponde a las Capitanías de Puerto ejercer la Autoridad Marítima en su Jurisdicción, promover, coordinar y controlar el desarrollo de las actividades marítimas, en consonancia con las Políticas de la Dirección General Marítima.

Así mismo, el artículo 76 del Decreto- Ley 2324 de 1984, le concede la facultad, previa investigación, para determinar y aplicar cuando hubiere lugar, las sanciones disciplinarias o multas por infracciones o violaciones a normas relativas a las actividades marítimas de la Marina Mercante.

Seguidamente, el artículo 79 de esta disposición, establece que constituye infracción a las normas de Marina Mercante toda contravención o intento de contravención a las normas del citado decreto, a las leyes, decretos, reglamentos y demás normas o disposiciones vigentes en materia marítima, ya sea por acción u omisión.

Así las cosas, para los casos que lleguen a configurar infracción de normas de la Marina Mercante, el artículo 80 de la misma regulación, contemplan las siguientes alternativas de sanción:

- a) Amonestación escrita o llamado de atención al infractor, en cuyo caso se dejará copia del informe de quien impuso la sanción o de la carta en su caso, en los archivos de la Dirección General Marítima y Portuaria y de las Capitanías de Puerto;
- b) Suspensión, que consiste en la pérdida temporal de los privilegios, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o certificados que haya expedido la Dirección General Marítima y Portuaria;
- c) Cancelación, que consiste en la pérdida permanente de los anteriores privilegios, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o certificados;
- d) Multas, las que podrán ser desde un salario mínimo hasta cien (100) salarios mínimos, si se trata de personas naturales y, de cinco (5) salarios mínimos hasta mil (1.000) salarios mínimos, si se trata de personas jurídicas. Por salario mínimo se entenderá el salario mínimo legal aplicable que rija el día en que se imponga la sanción o multa. La no cancelación de la multa una vez ejecutoriada la providencia mediante la cual se dispuso, dará lugar además a la acumulación de intereses legales y a que no se les expida o trámite solicitud alguna de renovación o prórroga de privilegios, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones o certificaciones a los titulares. (La subraya es nuestra).

El artículo 81 contempla las causales de agravación y atenuación que se deberán tener en cuenta para su imposición.



Por su parte, este Despacho de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, establece que las investigaciones y sanciones por las anteriores infracciones se tramitan de conformidad con las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aplicable al presente caso por tratarse de la normatividad procedimental vigente para la fecha en que se registraron los hechos materia de investigación.

De otro lado, el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, concluidas las averiguaciones preliminares, si fuese el caso, el juzgador formulará cargos mediante acto administrativo en el que se señalará, **con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes.** Así mismo, el artículo 49 ibidem, estatuye que el acto administrativo que ponga fin al procedimiento administrativo de carácter sancionatorio deberá contener:

1. La Individualización de la persona natural o jurídica a sancionar.
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción.
3. **Las normas infringidas con los hechos probados.**
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación.

Establecido lo anterior, para el caso concreto, se debe tener en cuenta en primer lugar, la información suministrada por el Cuerpo de Guardacostas de Cartagena, la cual se relaciona a continuación:

*“En desarrollo de control en el muelle Navas siendo las 05:58R se acercó la MN ZENITH y los tripulantes la amarraron al muelle, procedí a verificar documentación, certificado de seguridad, vigente hasta el 24 de octubre de 2022, licencias de los tripulantes vigentes, certificado de matrícula, (...) posteriormente procedí a preguntarles intención de maniobra y que personal iban a recoger, los tripulantes me manifestaron que iban a recoger a unos invitados del dueño de la embarcación el señor GABRIEL JAIME CADAVID VELEZ, (...)”*

A partir de lo manifestado, este despacho procedió a iniciar averiguación preliminar, en aras de determinar con precisión y claridad las circunstancias de los hechos que se informaron, junto con su relación o no con la vulneración de la normatividad marítima

En el curso de la etapa de averiguación preliminar, se indagó con al área de marina mercante encargada del registro de las naves, con el propósito de conocer a los datos concernientes al propietario y operador de la nave en comento, obteniendo los datos de la embarcación e identificación del capitán relacionado.

Como resultado de dicha diligencia cabe resaltar que los documentos de la embarcación se encuentran vigentes, tal como lo manifiesta el inspector, asimismo, la licencia de navegación del capitán se encuentra vigente.



Al respecto y dentro de lo que conforman el acervo recaudado, se tiene que según lo plasmado en el acta de protesta el inspector detecta que la embarcación se encuentra en alquiler; sin embargo, al interrogar a los tripulantes estos manifiestan ser amigos del propietario, el señor GABRIEL JAIME CADAVID VELEZ, armador que coincide con los datos registrados en la base de datos de la embarcación, sin que haya prueba que dé certeza de los hechos que constituyen la presunta infracción, advierte la Dirección General Marítima, acuerdo a resolución No. 0810-2021-MD-DIMAR-GLEMAR de 3 de septiembre de 2021, la cual hace especial mención sobre el referido principio la jurisprudencia constitucional ha establecido “la presunción de inocencia va acompañada de otra garantía : “el in dubio pro administrado”, toda vez que si el estado no cumple con la carga probatoria que le corresponde y existen dudas razonables respecto de la responsabilidad de quien está siendo objeto de investigación, la única respuesta posible es la exoneración”. Corte Constitucional. Sentencia C – 595 del 27 de julio de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio

Por ende, el despacho no encuentra suficiente el acervo probatorio obrante dentro de la presente investigación administrativa, para declarar como probados los hechos que dieron inicio a la presente investigación.

Es decir, el acta de protesta remitida por el inspector adscrito a la Capitanía de Puerto de Cartagena, que dio sustento para iniciar las acciones pertinentes que conllevaran al despacho, no aporta prueba de ninguna índole, que conlleve a obtener un grado de certeza frente a la comisión de las conductas contrarias a la norma marítima.

Al respecto y haciendo un análisis detallado de la información suministrada por la autoridad antes mencionada, encuentra el despacho que no existen suficientes elementos probatorios y de juicio, para establecer la existencia de una presunta infracción a la normatividad marítima colombiana.

En cuanto a la importancia del acervo probatorio para adelantar un proceso de tipo jurídico, el Consejo de Estado, mediante sentencia No. 11001-03-28-000-2014-00130-00, expresa lo siguiente:

*“...la importancia de la prueba está en relación directa con el principio de necesidad. Se requiere ineludiblemente la prueba para demostrar los hechos que han de servir de sustento a la aplicación del derecho y el juez no está llamado a subsanar la falta de pruebas con el mero conocimiento privado o personal”*.

Por su parte la Corte Constitucional con referencia al planteamiento que antecede, mediante sentencia C380 de 2002 manifiesta:

*“Las pruebas judiciales son los medios señalados por el legislador para crear en el juzgador la certeza o el convencimiento sobre la verdad de los hechos que son materia de*



*los procesos respectivos, con el fin de que el mismo aplique el ordenamiento positivo a los casos concretos”.*

En este orden de ideas y en virtud de la prevalencia del debido proceso amparado como un derecho fundamental en el artículo 29 de la constitución política de Colombia y como un principio básico regulado por la ley 1437 de 2011 (código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo), se debe contar con una serie de presupuestos esenciales al momento de sancionar a una persona por la comisión de una de las infracciones a las normas de la marina mercante, contenidas en las distintas reglamentaciones colombianas e internaciones, tales como: claridad en cuanto a los hechos que generaron la infracción y la relación directa entre éstos, plena identificación de las partes involucradas, así como la posible localización de las mismas, entre otros.

Así mismo, y en vista que no existen otras herramientas probatorias que aporten mayores elementos de juicio, este despacho desde una perspectiva garantista encaminada a amparar la presunción de inocencia con la que cuenta todo investigado, más aún cuando la conducta propone la imposición de una sanción, considera no suficiente el material consagrado en el expediente objeto de investigación para continuar el curso del presente proceso, por lo tanto, se ordenará el archivo de la averiguación preliminar surtida y los demás documentos anexos.

En mérito de lo anteriormente expuesto y atendiendo los principios de economía procesal y de celeridad contenidos en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, el capitán de puerto de Cartagena en ejercicio de sus facultades legales,

### **RESUELVE**

**PRIMERO:** Ordenar el archivo de la investigación administrativa No. 15022022-020 iniciada mediante averiguación preliminar de fecha 25 de enero de 2022, de la motonave denominada “ZENITH”, con base en los argumentos planteados en la parte motiva del presente proveído.

**SEGUNDO:** Comuníquese esta decisión de conformidad con la previsión legal contenida en el Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

**TERCERO:** Contra el presente proveído no procede recurso alguno.

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**



Capitán de Navío **DARIO EDUARDO SANABRIA GAITAN**  
Capitán de Puerto de Cartagena